La situación insostenible de muchos centros concertados

Manuel Estacio

Secretaría de Enseñanza Privada
FE CCOO

Somos muchos los que nos manifestamos contra los recortes en la enseñanza pública. Protestas que están más que justificadas debido no sólo al empeoramiento de las condiciones de los profesionales de la educación (rebaja salarial, aumento de la carga lectiva, disminución de plantillas y apoyos, etc.), sino también por el deterioro que los recortes causarán a la calidad del servicio educativo que recibirán los alumnos de los centros públicos en los próximos años.

LA CONSECUENCIA será una peor situación del nivel educativo con respecto a otros países de nuestro entorno, unas desigualdades sociales más acentuadas y el impacto negativo sobre la futura competitividad de la economía española.

La menor financiación de la educación también va dirigida a la escuela concertada. El deterioro en las condiciones en que se imparte la docencia es similar al de la enseñanza pública. Aunque se hable menos de ella, la escuela concertada cuenta con algo más de un tercio del alumnado escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos. Si en muchos centros públicos se están encontrando con problemas de liquidez para hacer frente a los pagos de funcionamiento como calefacción, electricidad o reposición de material fungible, en los centros concertados este problema es aún mayor pues afecta también a los salarios de parte de la plantilla. En estos centros el personal de administración y servicios (conserjes, limpiadores, auxiliares administrativos, etc.) y el personal complementario de educación especial (fisioterapeutas, logopedas, trabajadores sociales y auxiliares técnicos educativos) perciben también su salario de la misma partida económica con la que se financian los gastos de funcionamiento de los centros.

Aunque los retrasos en el pago se producen de forma habitual en muchas comunidades autónomas, en Castilla-La Mancha, y especialmente en el País Valenciano, la situación es alarmante. En esta última los retrasos en el abono de la partida de los módulos, llamada de "Otros gastos", superan ya los siete meses, lo que ha provocado que algunos titulares de los centros den la voz de alarma y anuncien la imposibilidad de mantenerlos abiertos si no se resuelve el problema, pues no pueden seguir adelantando lo adeudado por la administración educativa.

Los centros pertenecientes a grandes congregaciones religiosas quizá puedan contar con recursos propios para soportar algo mejor la situación, pero en el caso de los centros pequeños y las cooperativas esto no es posible si el retraso en el cobro se demora tanto. La primera consecuencia es que muchos trabajadores han dejado de percibir sus nóminas y que a los proveedores o suministradores de los centros se les devuelven los recibos de abono por sus servicios. También estas empresas tienen trabajadores que ven peligrar sus nóminas, cuando no su propio puesto de trabajo.

Si estos centros tuviesen que cerrar no sólo se perjudicaría injustamente a las empresas (las que prestan el servicio educativo y las contratadas por éstas para determinados servicios o suministros) y a los trabajadores que no perciben su salario por el trabajo realizado, sino que se estará vulnerando el derecho de los alumnos a la educación, recogido en la Constitución.

Sabemos que la desigual situación de liquidez en las comunidades autónomas es sumamente precaria, pero es en estas circunstancias cuando los políticos han de aplicarse en aquello para lo que los ciudadanos los han elegido, haciendo Política con mayúsculas y definir sus prioridades. El trato que den a aquellas partidas económicas destinadas a garantizar derechos fundamentales o aquellas otras cuya finalidad es contribuir a la solidaridad y a la cohesión social es lo que diferencian a quienes de verdad entienden la política como servicio público y un modo de mejorar la sociedad, frente a quienes la entienden como pura técnica de gestión, cuando no como una forma de promoción personal y económica.

Es indignante comprobar que mientras se imponen nuevos recortes en educación y sanidad, se paraliza la implantación de la Ley de la Dependencia y se suprimen programas destinados a medidas sociales de lucha contra la exclusión social, conocemos un nuevo caso de corrupción de responsables políticos o de despilfarro de fondos públicos en aeropuertos inútiles, esculturas absurdas, sueldos millonarios de asesores e intermediarios, concesiones a dedo de obras o de eventos a personajes de parodia, y todo tipo de fastos diversos.

La educación es el futuro y una parte fundamental de la salida de la crisis. Corresponde a las administraciones la responsabilidad de que se produzca en las mejores condiciones posibles. Un nivel de financiación análogo al de los países de nuestro entorno no garantiza por sí solo una mejora en nuestro nivel educativo. Claro que hacen falta otras medidas, pero sin esa financiación pública suficiente no es posible alcanzar los niveles de desarrollo hacia los que queremos converger.